

ANÁLISIS DE COYUNTURA I
ALGUNOS COMPONENTES
DE LA COYUNTURA DE 1996-1997

Roberto Cassá*

La coyuntura es un espacio temporal, en que se despliegan las fuerzas políticas de una formación social dentro de un determinado contexto de equilibrio de las relaciones sociales. Dichos agentes encuentran en el estado el escenario en que dirimen sus pugnas y coincidencias.

Es natural, por tanto, que cuando se alude a un análisis de coyuntura, de manera espontánea, se piense en el poder gubernamental como su referente principal. La operación es válida, aunque debe complejizarse, en la medida en que subyacen factores sociales que remiten a los ordenamientos que los determinan, o sea, las estructuras articuladas igualmente por el aparato estatal. Interesa, en todo caso, recuperar la tan sabida relación del estado con factores y procesos existentes en la sociedad, vista como totalidad. El aparato estatal expresa cierto equilibrio de fuerzas sociales al tiempo que relaciones asimétricas de dominio, no exentas de planos de hegemonía y consenso.

Tal interacción remite a la tendencia a la reproducción del aparato estatal, como parte de una eficacia cuyo desentrañamiento ha sido objeto de variadas disquisiciones en el análisis político. El poder tiende a reproducirse en función inversa a la incompetencia política de la sociedad, sujeta a planos de fragmentación y ausencia de mecanismos de imposición. Precisamente, el esta-

(*) Historiador

do introduce, desde fuera, mecanismos de unidad y coerción que coadyuven medularmente a la reproducción de las relaciones sociales.

Con esta indicación se está cuestionando el supuesto de la representación de intereses de grupos sociales determinados como vector clave de funcionamiento del estado. Y, de la misma manera, se cuestiona el supuesto de una racionalidad innata del aparato estatal, atemporal, exógena a los procesos, es decir, un automatismo virtuoso que compensa las insuficiencias en el interior de la sociedad.. El estado forma parte de la complejidad de los procesos, al tiempo que tiende a alzarse como un agente exógeno. Adolece, por tanto, de las dolencias del todo social, aunque su misión funcional tiene, entre otros fines, limitarlas con planos compensatorios.

La finalidad en cuestión no tiene mucho de virtuosa; más bien nos encontramos con lo opuesto: el estado comúnmente, por antonomasia, opera como una maquinaria conservadora de intereses y relaciones sociales . Pero, para cumplir ese cometido debe estar abierto al conjunto de acciones presentes en la sociedad. Esto le permite que se constituya, normalmente, en un espacio abierto al ajuste de intereses en juego, donde se pueden introducir presiones y modificaciones de alcances desiguales.

Debe subrayarse que esta capacidad de apertura constituye una variable dependiente de los contenidos del dominio social y político. Las iniciativas renovadoras tienden a lograr capacidad de incidencia en la medida en que se va tornando patente el agotamiento de la mecánica estructural. Desde luego, tal supuesto reviste inevitablemente un componente de subjetividad, ya que agotamiento de un contexto de dominio solo es efectivo en la medida en que se interioriza por agentes sociales interesados en desplazarlo. En cualesquiera de los casos, la variación de contenidos de la acción estatal deberá ser el producto de desplazamientos sociales ,cambios institucionales y modificaciones en el mapa de las correlaciones de fuerza.

Los linderos de la coyuntura nunca pueden ser absolutos y menos estáticos, porque al igual que en toda acción cognoscitiva comportan el punto de vista del sujeto. Lo importante es que se

asuma el análisis histórico y político de. tal manera que comporta un corto plazo enmarcado dentro de tendencias de largo plazo. El análisis de coyuntura presupone el estructural, aunque este último no lo agota, porque permite captar a profundidad la acción de los agentes, dando lugar a un conocimiento más refinado y políticamente útil.

El escenario de la coyuntura depende, pues, de los márgenes temporales y del espectro de componentes que se traigan a colación. Puede ser el de un conjunto de administraciones gubernamentales, una de estas en particular, una etapa determinada dentro de una administración o compartida entre varias, o bien unidades más breves, sobre todo cuando introducen especial intensidad, como una crisis política, el estallido de una rebelión popular, el marco de una huelga general de trascendencia, una revolución, etc. De la misma manera, el análisis puede focalizarse alrededor de ciertas líneas de fuerza o expandirse para considerar un mayor número de relaciones y determinaciones. Ciertos caracteres específicos deben reconocerse en tales descomposiciones, de forma que alumbren lo particular o irrepetible de la coyuntura.

La actualidad dominicana, como es vivida por porciones considerables de la población, está en gran medida acondicionada por las ejecutorias de la administración gubernamental del Partido de la Liberación Dominicana. A más de diez meses de iniciada, hay dos elementos sobresalientes que se pueden extraer de la misma: énfasis de continuidad en los parámetros de la dominación política y adscripción doctrinaria al neoliberalismo.

La combinación arroja un resultado peculiar; porque es la conclusión paradójica de las expectativas de cambio que se han venido exteriorizando en el seno de la sociedad. No hay que argumentar demasiado que el conformismo con lo ejecutado por Joaquín Balaguer se había venido reduciendo, después de su recomposición relativa fruto de la frustración dejada por las administraciones del Partido Revolucionario Dominicano. Al margen de matices y acentos, los deseos de cambio eran generalizados, en el seno de la sociedad. El Partido de la Liberación Dominicana se autoproclamó depositario máximo de dichas aspiraciones. Pero lo

terminó haciendo de manera ambigua, conjugando confusamente la reivindicación conceptual de lo hecho por Balaguer. Se revelaron falsos los supuestos de que la alianza que recibió el nombre de Frente Patriótico Nacional tenía un carácter meramente transitorio, con el fin de facilitar la ascensión del PLD al gobierno. Ahora los jerarcas del PLD, en pleno ejercicio del gobierno, se encargan de convocar la reedición de este acuerdo con el Partido Reformista. Una hipoteca por lo visto condiciona las ejecutorias de la cúpula peledeísta que controla el Poder Ejecutivo de la República.

Como es usual en la política, el dominio de unos pocos supone la expropiación de los más. La cúpula dirigencial hoy en el gobierno no ha respetado los compromisos programáticos contraídos con la sociedad. Hasta hace poco, la mayoría de la población había librado una especie de cheque en blanco a los incumbentes peledeístas para que definieran sus intenciones, con la expectativa implícita de que abrirían procesos de cambio.

Ese voto de confianza parece estar concluyendo por medio de un repudio creciente al gobierno. El descreimiento tal vez tiene por punto de partida la no resolución de expectativas sociales mínimas, pero cubre ámbitos más amplios y está llamado a profundizarse. No hay indicaciones de la disposición y ya tal vez de la aptitud de los jefes peledeístas por operar variaciones al estilo que han definido. Por el contrario, proclaman que lo están haciendo a la perfección, con la salvedad única de supuestos problemas de comunicación de sus realizaciones. En verdad la justificación retrata de cuerpo entero un proyecto de preservación de los contenidos esenciales de un orden social caracterizado por la desigualdad y la injusticia, remite a la búsqueda de concordancia con ese orden de una élite política que llegada al poder pretende perpetuarse en él indefinidamente. En aras de lograr tal objetivo, sus miras han complementado un sentido de continuidad de los marcos de la dominación política con la culminación, de las tendencias estructurales dominantes. En esto último encuentra su pertinencia la adopción del programa neoliberal de la globalización por parte de Leonel Fernández y su equipo de gobierno. No puede achacarse dicha elección a una sólida convicción intelectual, lo

que se puede fácilmente desmentir mediante una revisión de las colecciones de vanguardia del Pueblo y otras publicaciones, donde tantas descalificaciones se hicieron, a diestra y siniestra, a nombre de una vulgarización tropicalizada de lo que calificaba de marxismo. En ese tenor es demostrable que varios parámetros de la acción del PLD hicieron posible que Leonel Fernández asumiera las consecuencias de la búsqueda del poder por el poder, rompiendo con la renuncia manifiesta de hacerlo por parte de Juan Bosch. Por lo demás, las bases del giro estaban ya planteadas desde que, en 1990, el PLD se enfrentó a la eventualidad de acceder al Poder Ejecutivo.

Puede interpretarse que Leonel Fernández personalizó la potenciación de las rectificaciones introducidas subrepticamente por Juan Bosch, que propendieron a reiterar la experiencia populista del PRD, llevándola a sus últimas consecuencias en lo que respecta a las causas que determinaron la fugaz renuncia de Bosch al PLD en 1990. El núcleo del asunto prosaicamente se refiere al cálculo de que con políticas progresistas no se llega al poder, en el contexto de la caída del Bloque Soviético. Desde el momento en que el ascenso al poder quedó exento de contenidos programáticos, muchas cosas se tornaron posibles, como precisamente ha sido la adopción virtual del neoliberalismo. Los precedentes inmediatos de la acción del PLD comenzaron a dar forma a los propósitos, como se evidencia particularmente en su responsabilidad en el Pacto por la Democracia, que reconoció la prolongación por dos años de un gobierno ilegal, paso preparatorio de la alianza con el Partido Reformista. Mientras tanto, fuera del gobierno, los dirigentes maniobraban entre los imperativos de acceder al poder y la retórica que les permitía compactar las bases partidarias y ganar amplios espacios en sectores importantes de la sociedad, como los jóvenes, los trabajadores de mayores tradiciones formales, las capas medias, etc.

Tras la consecución de un sólido entendido con Balaguer y los jerarcas del Partido Reformista, sobrevino el practicado con la generalidad del gran capital nacional. Más que por empatía hacia el PLD, el apoyo obtenido provino del rechazo hacia el PRD, en especial su líder, tanto por consideraciones personales como de

las implicaciones de sus posiciones. De tal manera, el PLD se benefició de una objeción conservadora al PRD que además de los reformistas temerosos de represalias incluía a la jerarquía eclesiástica, el grueso de la alta burguesía (principalmente los sectores acostumbrados a presionar directamente sobre el Poder Ejecutivo) y, probablemente de manera discreta, la embajada de los Estados Unidos.

Se puede inferir que Leonel Fernández calculó que para triunfar requería del apoyo de los factores nacionales de poder y los votantes, pero que para tener una gestión exitosa tendría que anudar una estrecha conexión con el imperio. Este objetivo presupone el sesgo neoliberal, tarjeta de presentación ante Washington y los organismos internacionales, ya que se ajusta a las corrientes económicas dominantes en la escena internacional. Está suficientemente claro que este gobierno ha depositado todas sus expectativas en los efectos de la apertura hacia el exterior, la desregulación y las privatizaciones. Dadas las precariedades en que se desenvuelven la economía dominicana y los agentes sociales dirigentes de ella, la perpetuación de los rasgos autoritarios del sistema político deja de ser un elemento aleatorio para devenir parte consustancial de dicho programa.

En el estricto terreno económico el cálculo aparente radica en que se detonará el ingreso de capitales como factor dinámico del crecimiento económico; particularmente en el turismo, zonas francas y eventuales otras áreas de servicios. Se deja al albur del ajuste a las exigencias de la competitividad; en las condiciones perfectas de la apertura, la evolución de los sectores productivos nacionales. El supuesto teórico, como se sabe, predica la reacción eficiente de los productores, pero la realidad puede divergir radicalmente. En el interior del crecimiento, por lo menos, las experiencias muestran que se producen notables desniveles sociales en desmedro de las mayorías. Como parte de esto se produce una concentración del capital, por cuanto los menos eficientes salen del mercado.

En lo que compete a la República Dominicana tales efectos se magnifican debido a la inexistencia de instrumentos estatales que aprovechen los eventuales incentivos a la inversión y permi-

tan paliar los efectos destructivos y de empobrecimiento de la mayoría que se producen como parte de la aplicación de los preceptos neoliberales. Cabe agregar que las inversiones en el sector turístico, que se perfilan como el núcleo del crecimiento y de la inserción con el exterior, son en gran medida indiferentes a las orientaciones de políticas del conjunto de la economía, con tal de que se garanticen ciertos requisitos. Lo mismo se puede agregar respecto a las zonas francas, aunque el impacto de estas es decreciente.

En sentido inverso, los capitales nacionales quedarían profundamente lesionados en el caso de la aplicación al pie de la letra del programa de este gobierno, formulado por Andrés Dauhajre hijo. El idealizado arancel uniforme del 10%, en las actuales condiciones, llevaría a la quiebra masiva de productores de todas las escalas. Es de lógica que incluso la generalidad de los capitales en el sector comercial a la larga experimentarían severas dificultades.

Desde luego que eso podría parecer indiferente a las frías ecuaciones que parten del supuesto del equilibrio espontáneo, o sea la sustitución de unos productores por otros más eficientes, en este caso corporaciones del exterior. Pero ese no es el caso, ya que el mercado dominicano no ofrece incentivos a los capitales extranjeros dentro de los parámetros de su dimensión, recursos naturales y habilidades de la mano de obra.

A partir de lo anterior, se extraen dos consecuencias inmediatas del programa económico del régimen peledeísta. La primera es la culminación del esquema dependiente, que propende a hacer del país una economía abierta en que se minimicen los sectores productivos. La segunda radica en el empobrecimiento inevitable de la mayoría de la población, sea por la exacerbación de la desigualdad social como por los efectos de la culminación de la relación simple de exportación primaria (en este caso de servicios) y la importación de los bienes y servicios necesarios para una comunidad que cada vez los produce en menor escala. Si el efecto de la simplificación todavía no se ha hecho sentir más se debe al dinamismo del turismo en la última década, que ha permitido suplir las demandas crecientes de divisas para bienes de consumo.

Lo que no se contempla, por supuesto, es que tal compensación está llamada a finalizar si no se corrige con la protección de los sectores productivos nacionales.

Es sabido que el Congreso, animado por rivalidades partidistas y otros móviles, rechazó plegarse a la exigencia del Ejecutivo de aprobar en bloque el paquete neoliberal conjuntamente con el proyecto de la ley de gastos públicos de 1997. Menos conocidas son las negociaciones que se han llevado a cabo entre el gobierno y la cúpula empresarial, esto es, los principales grupos de la burguesía industrial, el sector de mayor incidencia en las políticas públicas, opuesto al paquete neoliberal. Si dicho paquete no se ha puesto en ejecución por vía administrativa, no se debe a la oposición congresional sino a la de los grandes industriales, que hasta ahora interponen un verdadero poder de veto. Los indecisos pasos del gobierno resultan algo enigmáticos, porque era de prever la oposición de los industriales, que escenifican una continua resistencia a la apertura desde su inicio en 1990.

Ahora bien, los industriales tienen la perspectiva de limitarse a ganar tiempo y tratar de disminuir el alcance de las medidas, para pugnar por sobrevivir o negociar opciones a futuro. Estas incluyen la conversión a intermediarios comerciales o el paso a áreas de servicios. Aunque los grandes industriales constituyen el grupo más compacto de la burguesía, operan a partir de una consideración defensiva de los intereses individuales. Sobre esta base, están inhabilitados para presentar una propuesta consistente. Tal vez parten del convencimiento de que al estar los norteamericanos detrás de las “reformas estructurales” y adecuarse a las tendencias de la economía mundial, a la larga resultaría inútil presentarles un cuestionamiento conceptual.

Dicha actitud defensiva contribuye a mantenerle al gobierno la expectativa de recuperar a plenitud el programa de “reformas”. El gobierno no tiene otro incluso ni otro plan de acción visible. Da incluso la impresión de que se tiene la expectativa de una repercusión automática de la apertura y el crecimiento sobre el desempeño en los sectores sociales, cuando debía invertirse exactamente la relación. Los secretarios de estado que no compartían

ese punto de vista se han plegado, aparentemente, ante las posiciones del presidente y de su abanderado directo, por cuenta de los organismos internacionales, el secretario Técnico de la Presidencia. Dada la impronta extraordinaria del Ejecutivo en el ordenamiento estatal del país, en cualquier caso se puede considerar la continuación previsible del programa neoliberal, en la medida en que lo permitan los componentes de la legislación vigente.

Pero, precisamente, en la medida en que enfrentará oposición a ese programa en distintos agentes de la sociedad, la previsible tentativa de continuar su aplicación estaría plagado de inconsistencias e irregularidades. Por supuesto, siempre es de alta conveniencia para la ciudadanía que no se produzca la sistematización del recetario neoliberal. El país se ha librado temporalmente de un plan ominoso, pero el nervio del debate en relación al mismo se mantiene. Ni siquiera alude a la presente administración gubernamental, porque proviene de los organismos internacionales, cuyos márgenes de interferencia en las políticas de los gobiernos de países dependientes no ha cesado de ampliarse.

En lo inmediato, en cualesquiera sentido que evolucionen las posibilidades de acción de la presente administración peledeísta, luce que sus márgenes de eficacia son mínimas. En los meses transcurridos ha mostrado no solo el contenido social que la anima, sino otros componentes anexos al mismo, que en conjunto aseguran un fracaso rotundo de las expectativas de cambio que se crearon sectores importantes de la población.

Tales ingredientes se derivan del “transformismo” que ha exhibido la práctica en el poder del PLD. Se alude con el término a la metamorfosis de la representación de los intereses populares, para en los hechos ceñirse a un sentido conservador del orden. Moralmente, a partir de esto, la gestión de PLD, con sus protagonistas emblemáticos de Andrés Dauhajre hijo y Marino Vinicio Castillo, Andy y Vincho, tiene que saldarse en el fracaso. Los dirigentes peledeístas, en su generalidad, han mostrado carecer de mística al reproducir con exactitud los perfiles convencionales de los políticos profesionales.

La dirigencia peledeísta actúa hasta ahora en el gobierno atendida a intereses corporativos muy precisos, reproduciendo la centralidad nociva de los políticos profesionales dentro del ordenamiento moderno del país, según la han establecido diversos exponentes del pensamiento radical desde el siglo pasado. Se han prestado masivamente a los mecanismos de cooptación corruptora que ofrecen las características peculiares del sistema en la República Dominicana. La medida de aumentar los salarios únicamente a los altos funcionarios, por su prontitud, delató el nervio de los propósitos de los recién encumbrados. En esto y en tantos otros comportamientos se han inscrito en el lineamiento de que el protagonismo político ha operado como uno de los medios cruciales de recomposición de los sectores sociales dirigentes del país. En verdad, a riesgo de mentir, los peledeístas no pueden exhibir una sola iniciativa innovadora de fondo, una diferenciación de comportamiento institucional, una sensibilidad por la suerte de los más que están fuera del mando y padecen los rigores de la desigualdad. Para los segmentos políticamente más progresistas y lúcidos, ya está suficientemente claro que el PLD representa una variación de lo mismo en prácticamente todos los ámbitos. La derrota de esa propensión de los incumbentes del poder, indispensable para que el país se enrumbe por una senda de realizaciones, cuestión que trasciende la coyuntura, requiere de una prédica opuesta a la proclamada por la doctrina peledeísta de disociar política y moral.

A la inconsistencia moral que develan las ejecutorias gubernamentales, se agrega la no menos grave inconsistencia intelectual delatada. Al margen de la falta de mística moral, aunque en interconexión con ella, los incumbentes del poder, con no demasiadas excepciones, están dando muestras de lamentable incompetencia. Se han constituido en un factor de agravamiento de tradicionales deficiencias en el funcionamiento del aparato estatal. La inercia y la falta absoluta de iniciativas renovadoras se combinan con una ya manifiesta impericia técnico-administrativa. Sería ocioso abundar en evidencias cómo la campaña de vacunación, para solo mencionar un caso.

Amparado en la arrogancia colectiva, el PLD no pudo considerar otra opción que un gobierno de partido. Leonel Fernández,

uno de los pocos conscientes de las dificultades que entraña tal diseño, por razones de conveniencias y correlaciones de fuerza, no ha podido obrar en otro sentido, aunque se ha preocupado de ampliar, instrumentalmente, el espectro de participantes en la gestión gubernamental. Esta preocupación presidencial obedece a lo que se puede interpretar como escepticismo en las potencialidades del PLD, como parte de la búsqueda de que desde el gobierno, con la participación del PLD, se geste un nuevo tipo de compactación conservadora, que relevantemente incluya porciones del Partido Reformista. Las realidades han impedido la concreción de este designio, por lo que el resultado no es otro que un gobierno de partido. Sobre todas las cosas, tal vez, la manifestación más acusada de dicho ordenamiento ha sido dar la espalda a las intenciones sanas de cooperación y participación en los asuntos públicos de contingentes calificados y bien intencionados. Los incumbentes peledeístas han reproducido desde la cúpula y las reparticiones del gobierno con las excepciones de lugar, un hiriente menosprecio a los reclamos y puntos de vista manifestados en el seno de la sociedad, con la contrapartida de complacencia a los de los muy ricos.

El PLD se presentó durante largos años como una élite preclara, exclusiva, radicalmente diferenciada del resto de los agentes organizados del país. Desde hace unos meses ha quedado patentizado que detrás de la figura de Juan Bosch se construyó un mito que ha dado lugar a un fiasco más. Sin duda en el PLD se anidaron reservas importantes, que fueron purgadas por los giros de oportunidad o quedaron internamente trituradas. Las que aún persisten corren el riesgo de quedar absorbidas, neutralizadas o desnaturalizadas, por complicidad inevitable con lo que está sucediendo. La estructura autoritaria de ese partido previene con minuciosidad la exteriorización de la disidencia. Es notable que hasta ahora no se conozca de ningún cuestionamiento autorizado en los organismos de base de las ejecutorias de la administración, aunque es perceptible la existencia de una crisis de identidad que alcanza porciones considerables de la militancia. Se puede extraer de la información disponible que las estructuras peledeístas se han desorganizado por efecto de la lucha de posiciones en la administración pública.

Ante lo que sucede ya se perciben las señales de una desilusión que alcanza segmentos crecientes de la población. Es razonable pensar por desgracia que el fenómeno apenas está comenzando, por lo que el gobierno en teoría todavía tendría la oportunidad de enmendar sus orientaciones, lo que es harto remoto que se produzca. El impacto negativo de la decepción está llamado a tener mayores alcances que en los años posteriores a 1978, en la medida en que el PLD se situó con exactitud como inquisidor feroz de lo que hacían los eternos rivales, en base a un discurso progresista que fue derivándose alrededor de las consignas de la honradez y la eficiencia.

El incremento previsible de la desilusión probablemente se traducirá en variados fenómenos, en primer lugar la profundización del escepticismo en la utilidad de la acción colectiva de acuerdo a los parámetros convencionales del sistema político e incluso otros alternativos, como la protesta social. Entre otros efectos, puede darse lugar a recomposiciones de la vigencia de las expresas propuestas autoritarias tradicionales, que habían perdido terreno en los años anteriores: incluso se comienza a poner en evidencia la recuperación de moldes partidarios autoritarios en la gestión actual de los asuntos públicos. El llamado a la conversión de los aparatos de base del PLD en organismos de seguridad muestra un temor infundado pero sobre todo un concepto del dominio que es lícito considerar que delata posibles consecuencias de cuidado. Al margen de los escenarios que se fragüen en un futuro próximo, el país está aquejado, de manera creciente, de una crisis de alternativas de los contenidos efectivos en que se ha venido desenvolviendo el sistema en su conjunto. Más que nunca se observa una marcada impotencia en la sociedad, una dispersión de sus integrantes, una incapacidad para traducir sus expectativas por medio de mecanismos autónomos. Una recomposición pasa por el proceso de que la población reaccione como medio de hacer uso de sus derechos, presionar al gobierno y a los otros componentes del sistema político y trascender las insuficiencias del partidismo tradicional. La esterilidad de las cámaras legislativas, para calificar moderadamente su *modus operandi*, no solo expresa la incesante recomposición de los contenidos de estado dominicano.

La acción congresional, en otro sentido, permite considerar advertencias acerca de lo que puede esperarse, en el presente contexto, de un recambio gubernamental del Partido Revolucionario Dominicano. Al igual que en el PLD, en el interior del PRD hay numerosos ciudadanos honrados y progresistas, pero esas cualidades no se exteriorizan en propuestas programáticas y prácticas cónsonas con las necesidades de las mayorías del país que ocupen la centralidad del quehacer partidario. Los congresistas del PRD en su mayoría se han solidarizado con las propuestas del Partido Reformista, se limitan a preocuparse por sus intereses particulares y no hacen ninguna formulación propositiva de un mínimo de importancia. Este comportamiento debe conectarse con la negativa pertinaz de una autocrítica de la experiencia gubernamental entre 1978 y 1986. Por último deben ponderarse los posibles efectos futuros de la enfermedad de José Francisco Peña Gómez. Ante los vacíos en la sociedad, tiene la mayor importancia que se definan perspectivas progresistas ciertas en el PRD, aunque muy difícilmente las mismas descarten la pertinencia de surgimiento de nueva forma de acción colectiva.

Este problema se inserta en el hecho de que las tendencias de los últimos años muestran una paradoja entre el decrecimiento de las potencialidades de los partidos políticos y el mantenimiento por ellos de un monopolio de representación y protagonismo. Esto es tanto más nocivo en la medida en que se acentúan las tendencias a la homogeneidad de las prácticas efectivas de los partidos alrededor de los parámetros políticos establecidos por Joaquín Balaguer desde la presidencia. La capacidad de acción de las organizaciones sociales ha disminuido de manera incesante, como manifestación de la fragmentación de la sociedad, la desilusión generalizada y los errores pertinaces de quienes proclaman representar alternativas diferenciadas.

En relación a esa insuficiencia el panorama coyuntural comporta elementos delicados. Las explosiones esporádicas de protesta de las mayorías pobres muestran escasa capacidad de impacto, no conducen a planos de institucionalización de la acción colectiva y se disocian de un programa global por cuanto se atienen a aspectos fragmentarios y de corto alcance. En el país se requiere del surgimiento de instancias que contribuyan a superar ese esta-

do de dispersión y desorientación. Dicho objetivo remite a la modificación obligada de los discursos tradicionales de izquierda pero no para tenerlo rigurosamente a la lógica del sistema, como han hecho los dos partidos denominados liberales, sino precisamente para encontrar las brechas para las respuestas factibles a las tendencias de la economía y la política internacionales en los últimos tiempos.

Como está por el momento descartada una solución revolucionaria, se hace indispensable tomar en consideración realidades aunque no se las eleve a la categoría de absolutas. El reto que se presenta es determinar si será factible superar las enormes dificultades que se interfieren para que las acciones de resistencia se traduzcan en propuestas alternativas viables. Tal vez conviene a casi un siglo, retomar la validez de la advertencia de Hostos a los pueblos antillanos, cuando enunció la exigencia de la desviación. Significó el maestro con esa categoría lo inevitable de asumir parámetros de la modernidad de los países industriales, al tiempo que la no menos crucial exigencia de que para que no implicaran la anulación de la soberanía se acompañara de la creación de un modelo distinto de sociedad, que trascienda las lacras de la modernidad.

Por más centralidad que se acuerde a la construcción de instrumentos organizados en el seno de la sociedad, por fuerza tiene que propender a objetivos gubernamentales. Esto se magnifica en un país en que la sociedad manifiesta acusadas debilidades. De ahí que, en el difícil caso de emprenderse la construcción de alternativas en cuestión, habría que priorizar dentro de la agenda las evaluaciones que contribuyan a prever la renovación de los perfiles tradicionales del partidismo político. Este tipo de proyectos comporta no pocos problemas, como puede ser el logro de una dialéctica creativa entre diversidades y logros de planos de unidad de un sujeto popular alternativo alrededor de un proyecto de sociedad. La resolución de los problemas involucrados trascienden la coyuntura y se presentan como tarea permanente, al parecer ilusoria pero a la cual no se puede renunciar como cuestión de principio.